

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Apelación Auto

Exp. 05001-31-05-005-2021-00019-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por LUZ ELENA GALEANO, frente al auto que denegó una medida cautelar dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra de FORMAMOS S.A.S. y FORMAMOS CON ACCIÓN S.A.S.

ANTECEDENTES:

La promotora de la acción ejecutiva impulsó este trámite para lograr la satisfacción plena del acuerdo conciliatorio efectuado dentro del proceso ordinario con radicado 2018-00932 en la diligencia del artículo 77 del CPTSS en su etapa de conciliación, donde se pactó la cancelación de una suma de dinero equivalente a \$7.000.000 que a la fecha no se ha cancelado pese a comprometerse a realizar el pago dentro de los tres (3) días siguientes por transferencia electrónica. En esa oportunidad, se solicitó una medida cautelar, encaminada al embargo de los dineros que Formamos S.A.S. pudiera tener en las cuentas activas en Bancolombia S.A., sin ser exitosa por ausencia de información, y posteriormente una vez librado el mandamiento ejecutivo (Archivo 11), por auto del 09 de junio de 2022 (Archivo 34), se decretó el embargo de la razón social “Formamos con Acción S.A.S. en liquidación” con Nit 900.618.223-4.

Más adelante, fue solicitado el embargo de las cuentas bancarias de Martha Cecilia Vélez Vélez en su calidad de persona natural, quien funge como representante legal de Formamos con Acción S.A.S. en liquidación (Archivos 48 a 50), la que por providencia que se emitió el 05 de junio de 2023 fue denegada, por considerar el fallador de primer grado que la señora Vélez Vélez como persona natural no ha sido vinculada al proceso, estando compuesta la parte ejecutada por las sociedades Formamos S.A.S. y Formamos con Acción S.A.S. en liquidación, encontrando por demás la insatisfacción de los requisitos formales que enlista el artículo 101 del CPTSS referidos a la denuncia de bienes y la especificación de la cuenta bancaria a embargar.

La ejecutante por intermedio de su mandatario judicial se apartó de la negativa dispuesta e interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, señalando que por información recibida de la Cámara de Comercio, la liquidación de Formamos con Acción S.A.S. no fue por iniciativa de la representante legal sino por disposición oficiosa en razón de la no renovación de la matrícula mercantil por más de cinco años, luego no hay liquidador por requerir, quedando como única alternativa la representante legal que además es la firmante del acta de conciliación que sirve de título ejecutivo, quien debe responder con su propio patrimonio, en razón a su omisión dolosa de negarse a cumplir la obligación adquirida, y de haber llevado a cabo las reservas económicas necesarias para dar cumplimiento a la obligación. Expone que si bien el representante legal de una empresa no es por regla general responsable, y menos, solidario de las deudas laborales del empleador, tal principio tiene sus excepciones, pues tiene a su cargo los perjuicios que causa y las irregularidades que ocurran en su administración, debiendo hacerse responsable de sus decisiones, quien solidaria e ilimitadamente responde con su propio patrimonio, siempre que se demuestre que tuvo participación en el perjuicio económico alegado por el acreedor, concepto que aduce es aplicable para quienes son administradores de una S.A.S.

La autoridad judicial por decisión que profirió el 04 de septiembre de 2023 (Archivo 54), no repuso su determinación insistiendo en que la señora Vélez interviene en este trámite es como representante legal de una de las sociedades ejecutadas, sin que haya sido vinculada como persona natural,

señalando que lo que le atañe es demandar un perjuicio económico, sin que en el asunto haya ocurrido, recalcando que además no se atendió la denuncia de bienes ni se determinó el bien a embargar; y en su lugar, concedió la apelación propuesta en el efecto suspensivo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto atacado se encuentra previsto en el numeral 7° del artículo 65 del CPTSS, según el cual son recurribles a través de la apelación las decisiones de primer nivel que decidan sobre medidas cautelares.

A partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si la resolución de la medida cautelar pedida por el promotor de la acción ejecutiva, resulta pertinente de cara a la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas frente a sus acreedores en el ámbito laboral.

Pues bien, para dar resolución al disenso presentado por la activa, se tiene que las medidas cautelares son actuaciones procesales adoptadas judicialmente, que persiguen asegurar la efectividad de la tutela otorgada en la resolución judicial que, en su caso, se dicte, con las que se evita insolvencias, alzamientos de bienes, pérdidas de la cosa, deterioros de la misma o cualquier otra eventualidad que pudiera acontecer antes de hacerse efectiva una obligación. De ese modo, se asegura la eficacia de la cancelación de la deuda y de los derechos objeto de controversia judicial y en ese mismo orden, se contribuye al acceso de la administración de justicia y a la igualdad procesal; pero no cualquier instrumento cautelar ha de proceder, por cuanto pueden llegar a afectar el derecho de defensa y debido proceso, en la medida que implican la restricción del derecho de una persona, por lo que debe tenerse por cierto que serán garantías destinadas a asegurar el cumplimiento de las

obligaciones adquiridas con identificación del titular para no infringir sus derechos.

Ahora, como es claro, en el asunto con quien se suscribió el acuerdo conciliatorio que se constituyó en el título de ejecución, fue con Marta Cecilia Vélez Vélez en su calidad de representante legal de Formamos con Acción S.A.S. en liquidación y Formamos S.A.S, calidad que se corrobora con los certificados de existencia y representación legal de la empresa (Págs. 7-13 Archivos 48 a 50), quedando obligada la persona jurídica bajo su representación y no ella como persona natural, pues su actuar procedió en nombre de otro, y si bien es quien tiene a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales de la empresa, en el marco de las obligaciones ante los acreedores, es la persona jurídica como sujeto de derechos y obligaciones quien asume las responsabilidades, donde no es concomitante la afectación de los accionistas - *artículo 98 C. Ccio-* y mucho menos de quien hace la representación de la compañía para la ejecución de todas las facultades y atribuciones de ley para la marcha de la empresa social.

De este modo, si quien fungió como parte empleadora no fue Marta Cecilia Vélez Vélez, y en esa medida, quien se obligó a reconocer la suma dinero objeto de este trámite de ejecución fueron las S.A.S., no se hace posible como bien lo concluyó el *a quo* que el embargo se decrete sobre los bienes que recaen en cabeza de esta persona natural que en esa calidad no se hizo partícipe ni dentro del proceso ordinario ni del actual de ejecución, siendo necesario recordar que sus productos financieros no hacen parte del activo de la sociedad en liquidación, sino que integran el patrimonio individual, por lo que los conflictos económicos que se susciten con la empresa bajo su representación no perturban sus activos; a menos que se demuestre que por cuenta suya y por razón de conductas encuadradas en dolo o culpa, ha generado unos perjuicios, y deba en ese orden y bajo el propósito de cubrir esas consecuencias, responder solidaria e ilimitadamente con su patrimonio- *artículo 24 Ley 222 de 1995-*, pero antes, y ante un caso como el presente, no es posible menoscabar su capital a fin de cubrir erogaciones que son propias de la sociedad que representa cuya gestión incluso, puede terminar por decisión en junta de socios, sin que pueda pregonarse en ese contexto, que

ante varios nombramientos en esa calidad, deban en su carácter de particulares responder por las obligaciones contraídas por las sociedades cuyo capital y medios económicos se conforman con absoluta independencia al de su representante legal o gerente.

Es bajo esas reflexiones que se da razón a la decisión atacada, encontrando acertada la negativa dada sobre la medida cautelar pedida, por lo que la decisión revisada habrá de confirmarse.

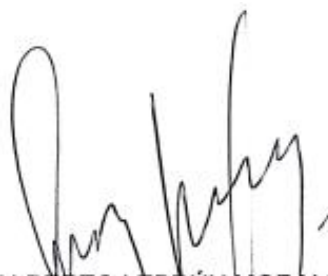
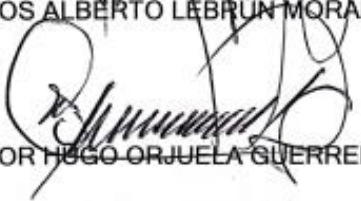

En esta instancia no se causaron costas.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto proferido el 05 de junio de 2023 en cuanto dispuso la improcedencia de la medida cautelar solicitada.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que el anterior auto fue notificada por
ESTADOS N° 177 fijados el 18 de octubre de 2023
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario